



ESPAÑA

INTERVENCIÓN

DEL PROFESOR CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS
JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL DEL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
DE ESPAÑA

EN LA SEXTA COMISIÓN
DEL 74º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS

Tema 79: Informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 71º período de sesiones (PARTE II)

Nueva York, 1 de noviembre de 2019

STATEMENT

BY PROFESSOR CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS
HEAD OF THE INTERNATIONAL LEGAL OFFICE
OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, EUROPEAN UNION AND
COOPERATION OF SPAIN

AT THE SIXTH COMMITTEE
OF THE 74th SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY

Agenda item 79: Report of the International Law Commission
on the work of its 71st session. (CLUSTER II)

New York, 1 November 2019

(Unofficial translation. Check against delivery)

Sr. Presidente,

Vamos a centrar nuestra intervención en el tema de la “Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado”, sobre el que deseamos hacer ciertas observaciones. Los trabajos sobre este tema se han venido desarrollando en la Comisión de Derecho Internacional (CDI) durante su 71º período de sesiones, en el que se han debatido los aspectos procesales de la inmunidad a partir de las propuestas contenidas en el Sexto y Séptimo Informes presentados por la Relatora Especial, la profesora Concepción Escobar, a quien rendimos reconocimiento por su encomiable labor.

Debe advertirse enseguida que los aspectos procesales de la inmunidad se encuentran estrechamente vinculados con el alcance de la misma. Conviene reiterar a este respecto, por lo que se refiere al debate sobre el proyecto de artículo 7, que apoyamos el establecimiento de un sistema de límites y excepciones a la inmunidad *ratione materiae*. Como ya se ha defendido ante esta Sexta Comisión, consideramos que no se debería poder alegar la inmunidad *ratione materiae* por parte de funcionarios del Estado extranjero cuyo mandato haya terminado, respecto de crímenes de Derecho Internacional de tanta gravedad como los incluidos en el citado proyecto de art. 7. A saber: el crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra, el crimen de apartheid; la tortura; y las desapariciones forzadas.

En primer lugar y en relación con los aspectos procesales de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, estamos de acuerdo con carácter general en que deben ser considerados como un todo en relación con la aplicación de la inmunidad, cualquiera que sea su alcance *ratione personae* o *ratione materiae*. Manifestamos también nuestra conformidad con la propuesta de art. 9, titulado “determinación de la inmunidad”, según el cual la determinación de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado corresponde a los tribunales del Estado del foro competentes para ejercer la jurisdicción. En el marco de un Estado de Derecho, como es el caso de España, no hay ninguna duda de que la aplicación de las normas internacionales que regulan la inmunidad de jurisdicción penal de los funcionarios extranjeros, corresponde a los jueces y tribunales españoles. Siempre en el respeto de la división de poderes establecida en la Constitución española de 1978; y en cumplimiento de las garantías legales y procesales establecidas en el ordenamiento jurídico español; más en particular, de las referidas a la protección de los derechos humanos de toda persona objeto de un procedimiento judicial ante los tribunales españoles. Actuación que, a su vez, está sometida al control jurisdiccional que pueda ejercer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En segundo lugar, estamos también de acuerdo con la propuesta de art. 10.6, según el cual los órganos competentes para determinar la inmunidad deben pronunciarse de oficio sobre su aplicación respecto de los funcionarios del Estado que gocen de inmunidad *ratione personae*, con independencia de que el Estado del funcionario invoque o no la inmunidad.

Es decir, los tribunales internos deben reconocer de oficio la inviolabilidad de los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores extranjeros en activo, así como de los agentes diplomáticos y consulares debidamente acreditados ante el Estado receptor.

En tercer lugar, manifestamos también nuestra conformidad en su conjunto con la propuesta de arts. 12, 13, 14 y 15, que regulan las garantías procesales que se deben aplicar entre el Estado del foro y el Estado del funcionario. Valoramos positivamente esta propuesta de desarrollo progresivo del Derecho Internacional, con la que, entre otras cuestiones: se establece la obligación de notificación al Estado del funcionario por parte del Estado del foro de que existen elementos que permiten concluir que sus tribunales pueden enjuiciar a uno de los funcionarios del primer Estado (proyecto de artículo 12); se prevé el intercambio de información entre ambos Estados (proyecto de art. 13); se regula que cabe la posibilidad de que el Estado del foro pueda remitir el procedimiento penal al Estado del funcionario (art. 14); se establece un mecanismo de consultas entre ambos Estados (art. 15); y se regulan las garantías procesales necesarias para que el funcionario reciba un trato justo e imparcial ante los tribunales del Estado del foro, entre ellas la obligación a cargo de las autoridades de este último de comunicar sin demora al Estado del funcionario la detención o cualquier otra medida que afecte a la libertad personal del funcionario, con el objetivo de que pueda asistirle de conformidad con el Derecho internacional.

En cuarto lugar, con relación a los futuros trabajos de la CDI sobre este tema, al igual que debiera suceder en otros casos que son objeto de la labor de este órgano codificador, nos mostramos favorables a que en el proyecto de artículos que se apruebe en segunda lectura se incluya un mecanismo de solución de controversias relativas a la interpretación y la aplicación de sus disposiciones. Mecanismo de solución de controversias que debe estar basado en el recurso obligatorio al arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia, si la controversia no se soluciona previamente a través de la negociación o de cualquier otro medio de solución de controversias que las partes en la misma acuerden aplicar.

Para concluir, valoramos positivamente los trabajos realizados hasta la fecha por la CDI sobre la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Reiteramos la conveniencia de que se negocie y adopte un tratado internacional en esta materia, a partir del proyecto de artículos que apruebe la Comisión en sus próximos períodos de sesiones. Con el objetivo final de codificar y desarrollar progresivamente el Derecho Internacional y garantizar una mayor seguridad jurídica en este sector de normas del Ordenamiento internacional.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Mr Chairman,

We are going to focus our statement on the issue of “Immunity of States Officials from Foreign Criminal Jurisdiction”, about which we would like to make some observations. The work on this issue that the International Law Commission (ILC) has been carried out during its 71st session, during which procedural aspects of immunity have been debated, starting with proposals contained in the Sixth and Seventh Report submitted by the Special Rapporteur, Prof. Concepción Escobar, whose commendable work we acknowledge.

The procedural aspects of immunity, it must be immediately pointed out, are closely tied to its scope. It is worth repeating here, as regards the debate on draft Article 7, that we support the creation of a system of limits and exceptions to immunity *ratione materiae*. As we have already argued before this Sixth Committee, we believe that it should not be possible for officials of a foreign State whose term has ended to allege immunity *ratione materiae* with regard to crimes under international law as serious as those included in the aforesaid draft Article 7. These are: the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, the crime of apartheid, torture, and forced disappearances.

Firstly, as regards procedural aspects of State officials’ immunity from foreign criminal jurisdiction, we agree, generally speaking, that they should be considered as a whole with regard to the application of immunity, whether its scope is *ratione personae* or *ratione materiae*. We also express our agreement with draft Article 9, titled “Determination of immunity”, according to which it shall be for the courts of the forum State that are competent to exercise jurisdiction to determine the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction. In a State under the rule of law, such as Spain, there is no doubt that the application of international norms regulating immunity from criminal jurisdiction of foreign officials corresponds to Spanish judges and Spanish courts. Always respecting the division of powers established in the 1978 Spanish Constitution, and in compliance with the legal and procedural safeguards established under Spanish law, more particularly, the guarantees protecting the human rights of every person involved in a legal proceeding before the Spanish courts. An action which is, in turn, subject to the judicial review that could be exercised by the European Court of Human Rights.

Secondly, we also agree with draft Article 10.6, according to which the organs that are competent to determine immunity shall decide *proprio motu* on its application in respect of State officials who enjoy immunity *ratione personae*, whether the State of the official invokes immunity or not. In other words, the courts must recognise *proprio motu* the inviolability of current heads of State, heads of Government, and foreign Ministers of Foreign Affairs, as well as diplomatic and consular agents who are duly accredited before the receiving State.

Thirdly, we also state our agreement overall with the draft Articles 12, 13, 14, and 15, which regulate the procedural safeguards that should be applied between the forum State and the State of the official. We welcome this proposal on the progressive development of international law, which, among other issues: establishes the forum State's obligation to notify the State of the official whether there is sufficient information to conclude that a foreign official could be subject to its criminal jurisdiction (draft Article 12); an exchange of information between both States is envisaged (draft Article 13); the possibility of the forum State transferring the criminal proceedings to the State of the official is regulated (Article 14); mechanism for consultations between the two States is established (Article 15); and the procedural safeguards necessary for the official to have a fair and impartial trial in the forum State are regulated, including the obligation of the forum State to inform the State of the official without delay of such person's detention or any other measure that might affect the official's personal liberty, so that the official can receive the assistance to which he or she is entitled under international law.

Fourthly, with regard to the ILC's future work on this issue, as should occur regarding other matters that this codifying body addresses, we are in favour of having the draft Articles approved on second reading include a dispute resolution mechanism with regard to the interpretation and application of their provisions. This dispute resolution mechanism should be based on an obligatory appeal to the International Court of Justice or to international arbitration, if the dispute is not previously resolved through negotiation or through any other means of dispute resolution that the parties in said dispute may agree upon.

In closing, we view positively the work carried out to date by the ILC regarding the immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction. We reiterate the need for an international treaty on this issue to be negotiated and adopted, based on the draft Articles that the Commission approves in its upcoming sessions. The ultimate purpose is to codify and progressively develop international law, and to ensure greater legal certainty in the area of regulating international law.

Thank you so much Mr. President.